



HAL
open science

Memoria histórica, democracia y desarrollo en Chile 1973-2003

María Chiara Bianchini

► **To cite this version:**

María Chiara Bianchini. Memoria histórica, democracia y desarrollo en Chile 1973-2003. Encuentro de Latinoamericanistas Españoles (12. 2006. Santander): Viejas y nuevas alianzas entre América Latina y España, 2006, s.a., España. pp.1517-1526. halshs-00104354v2

HAL Id: halshs-00104354

<https://shs.hal.science/halshs-00104354v2>

Submitted on 28 Sep 2010

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

MEMORIA HISTORICA, DEMOCRACIA Y DESARROLLO EN CHILE (1973-2003)

BIANCHINI, Maria Chiara

Septiembre, 2006

XII Encuentro de Latinoamericanistas Españoles

RESUMEN: “*Los proyectos políticos para el presente y el futuro son una proyección en el tiempo y en nuevas circunstancias, o frente a nuevos temas y problemas, de los vividos en determinadas cristalizaciones históricas que definen la identidad de una nación*”. La memoria colectiva es una de los elementos de constitución de los modelos de modernidad. En el Chile actual, la ausencia de un debate sincero sobre la memoria de ciertos hitos fundamentales como la experiencia de la Unidad Popular (1970-1973) y el golpe de Estado de 1973 es funcional a la mantención de una democracia de baja intensidad e incapaz de cuestionar el actual modelo de desarrollo y modernidad. En particular, la pugna entre las distintas interpretaciones de la historia que se explicitan en ocasión de los aniversarios del golpe, ha derivado en una narración oficial funcional a la legitimación de una continuidad institucional y socio-económica importante entre el Chile dictatorial y el Chile democrático, favoreciendo la instauración de una democracia formal y poco participativa en la que el “consenso” social y político se ha impuesto como valor supremo, por encima de la búsqueda de pautas de desarrollo y proyectos nacionales alternativos. La incorporación de las memorias pertenecientes a los movimientos sociales y a los grupos de izquierda en el debate político es un paso esencial para la reconstrucción ética de una comunidad nacional chilena, para la profundización de su democracia y para abrir las alternativas de su proyección hacia el futuro

Palabras Clave: Memoria histórica, Golpe de Estado, Unidad Popular, Democracia, Izquierdas, Participación.

Introducción

Comentando la victoria de Michelle Bachelet en las elecciones presidenciales que se han celebrado en Chile el 11 de diciembre de 2005, Mario Vargas Llosa ha escrito una columna en la sección de opiniones de *El País*, cuyo título “Bostezos chilenos” constituye un buen punto de arranque para las reflexiones de esta ponencia. El escritor califica la elección de Bachelet como un “bostezo” de la política chilena, aplaudiendo el nivel de estabilidad y consenso demostrado por la democracia chilena en esa ocasión: “*¿Era aquello Chile, un país latinoamericano? La verdad es que esa competencia electoral parecía una de aquellas aburridas justas cívicas en que los suizos o los suecos cambian o confirman cada cierto número de años a sus gobiernos, mucho más que una elección tercermundista, en la que un país se juega en las ánforas el modelo político, la organización social, y, a menudo, hasta la simple supervivencia (...) En el debate entre Michelle Bachelet y Sebastian Piñera, que tuvo lugar pocos días antes del final de la segunda vuelta, había que ser vidente o rabadomante para descubrir aquellos puntos en que los candidatos de la izquierda y la derecha discrepaban de manera frontal. Pese a sus respectivos esfuerzos para distanciarse unos de otro, la verdad es que las diferencias no tocaban ningún tema neurálgico, sino asuntos más bien cuantitativos (para no decir nimios)*”¹. En un momento en el que muchos países latinoamericanos parecen estar viviendo cambios políticos inéditos en dirección de la búsqueda de nuevos modelos de democracia y desarrollo, la elección en Chile de una presidenta, que además de ser mujer (lo cual no deja de ser novedoso), es socialista y ha sido víctima de la represión pinochetista, aparece aquí descrita como un “bostezo” en el desarrollo plano de la política chilena y la contienda electoral refleja una sorprendente convergencia en los proyectos de la izquierda y de la derecha. Puesto que se trata de un país que vivió, a principios de los 70s, un intento único de transición al socialismo en el marco de las

¹ VARGAS LLOSA, Mario, “Bostezos chilenos”, *El País*, domingo 29 de enero de 2006. p.15

instituciones democráticas, seguido por 17 años de unas de las dictaduras más cruentas del siglo XX y por una difícil transición a la democracia, cabe preguntarse sobre los procesos que han llevado al escenario actual caracterizado por esta insólita continuidad y convergencia de los proyectos políticos. En particular, analizaremos la relación entre el desarrollo de las proyecciones políticas de Chile con la evolución de la memoria -o más bien de las memorias -colectivas de ciertos hitos que marcan indudablemente la historia chilena reciente.

Memoria y futuro

La idea que subyace a este análisis se fundamenta en la propuesta del sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón, que afirma que todo proyecto de país implica una elaboración de la memoria. Es decir, *“los proyectos políticos para el presente y el futuro son una proyección en el tiempo y en nuevas circunstancias, o frente a nuevos temas y problemas, de los vividos en determinadas cristalizaciones históricas que definen la identidad de una nación”* (GARRETÓN, M.A., 2003). Para todas las generaciones del Chile de hoy, y probablemente las de las próximas décadas también, el hito histórico que marca la identidad - o las identidades - de la comunidad nacional está definido en torno al 11 de septiembre de 1973, entendido como la negación y término de un período de un proyecto histórico y como el inicio de otro que, a su vez, da origen al contexto de vida del Chile actual. Así que el contenido de los proyectos políticos para el futuro se define, y se ha definido durante los últimos treinta años, también (aunque no se agote en esta) a través de la memoria de lo que fueron las experiencias de la Unidad Popular (UP), de la dictadura militar y de los procesos de democratización. En este ensayo nos referiremos, en particular, al primero de estos hitos, es decir a la memoria de la sociedad chilena sobre el trienio del gobierno de Salvador Allende y del golpe de Estado como epílogo dramático de esa experiencia. La memoria es entendida aquí como el proceso de interpretación, aprendizaje y resignificación de ciertos eventos políticos conflictivos. Es un proceso en el sentido de que lo que se recuerda, lo que no se recuerda y como se recuerda, cambia dinámicamente en el tiempo. *“Las operaciones del recuerdo y el olvido ocurren en un momento presente, pero con una temporalidad subjetiva que remite a acontecimientos y procesos del pasado, que a su vez cobran sentido en vinculación con un horizonte futuro”* (JELIN, E., 2002:2). Esa temporalidad se refiere también al devenir, al paso del tiempo y las transformaciones de los procesos sociales a lo largo de la historia. De ahí la necesidad de *“historizar la memoria”*, es decir, analizar las transformaciones y cambios en los actores que recuerdan, olvidan e interpretan en cada momento, en los distintos climas culturales y políticos en que se desarrollan las prácticas de la memoria. Además de transformarse en el tiempo, la memoria varía según los individuos y las colectividades. De hecho, la memoria es también, como sugiere Elizabeth Jelin, un campo de enfrentamiento de distintas visiones que los diversos actores, *“emprendedores”* de la memoria, defienden para legitimar y dar fundamento a su proyecto futuro y a su identidad en el presente (JELIN, E., 2001).

“Las fechas conmemorativas, con su recurrencia en el ciclo anual, son puntos de entrada privilegiados para el análisis de la tensión entre los rituales que se reiteran y reflejan continuidades identitarias y de sentido, por un lado, y las fracturas, cambios y transformaciones en las prácticas y significados de la conmemoración por el otro” (JELIN, E. 2002: 2). La primera continuidad que cabe mencionar es que, a lo largo de las últimas tres décadas, el 11 de septiembre es una fecha emblemática que constituye un escenario donde se despliegan los conflictos entre diferentes interpretaciones y sentidos del pasado. Los aniversarios del golpe de Estado son momentos de *“irrupción de la memoria”*, en los que se genera el espacio para reinterpretar los hitos de la historia nacional que antes mencionábamos; por esta razón, el análisis de los discursos que surgen a partir de esa conmemoración en distintas etapas de la historia chilena, ofrecen una herramienta especial para entender la evolución de las identidades y de los proyectos político en el tiempo. Se trata de una fecha que sigue siendo muy conflictiva (HUNEEUS, C., 2003) y esto demuestra la ausencia de una memoria compartida en torno a los hitos fundantes del Chile actual. Si es verdad, como decíamos al principio, que la memoria es el fundamento ineludible de la identidad colectiva y de los proyectos políticos para el futuro, esto significa que en Chile la sociedad no comparte el núcleo básico de la

memoria necesario para que los distintos grupos asuman la pertenencia a un mismo país y la proyección hacia un ideal de sociedad básicamente compartido.

Para dar cuenta de esta evolución, de sus continuidades y rupturas, se eligió analizar las conmemoraciones de las décadas de los aniversarios del golpe de Estado: las formas de recordar el 11 de septiembre a diez, veinte y treinta años de los acontecimientos, han incluido siempre una interpretación sobre lo que pasó antes de ese día, después de ese día y sobre lo que nunca ha de volver a pasar. Las conmemoraciones del 11 de septiembre en las décadas de su aniversario corresponden a tres etapas muy distintas de la historia reciente de Chile y reflejan transformaciones en las identidades y en los proyectos de los “emprendedores” de la memoria, que narran su versión de los acontecimientos. En septiembre de 1983, Chile vivía bajo un régimen dictatorial, que ya había tenido tiempo y dureza suficiente para realizar profundos cambios en las estructuras económicas y sociales de la nación. Pinochet ya se había trasladado al Palacio de la Moneda en calidad de Presidente de la República, legitimado por la Constitución aprobada en el fraudolento plebiscito del año 80. Se trata de un periodo en el que la represión y el control son muy importantes y el poder comunicativo del régimen tiende a imponer su versión del golpe como momento heroico en el que Chile se salvó del caos y del marxismo. Sin embargo el ‘83 es también un año de grave crisis económica y del protagonismo de grupos sociales opositores cada vez más organizados y masivos que creían en la posibilidad de derrocar al dictador sin tener que esperar el cumplimiento de los plazos fijados por la Constitución. Los movimientos de oposición defienden su propia versión de la “epopeya militar” en curso y conmemoran el 11 como “momento trágico” del quiebre de la democracia chilena, de la muerte de Allende y de la interrupción del proyecto allendista. Durante todo el año 83, y en el mes de septiembre en particular, se desarrollan protestas callejeras que dejan el saldo de muchos muertos, heridos, desaparecidos y presos.

En septiembre de 1993 Chile estaba transitando hacia la democracia y ya se desarrollaba la campaña electoral para el segundo periodo presidencial en régimen democrático. El presidente Aylwin, que en 1973 había sido entre los que apoyaron el golpe militar, encabezaba una coalición, la Concertación de Partidos por la Democracia², que había surgido de la oposición democrática durante el régimen. Económicamente Chile vivía un momento muy propicio en el marco de una economía sustancialmente neoliberal: el país se autodenominaba el “jaguar” de Suramérica. Ya se había publicado el Informe Rettig a través de cuyas páginas el Estado había reconocido públicamente las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas bajo la dictadura, sin embargo la controparte del esclarecimiento de la verdad fue una política de “justicia en la medida de lo posible”. Pinochet era todavía comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y los militares tenían un poder muy relevante en el ámbito de la política nacional, en el mayo del mismo año había habido un amenazador movimiento de cuarteles para forzar el precario equilibrio entre poder civil y militar. Siguen existiendo versiones muy conflictivas en torno al desempeño de la dictadura recién acabada y sobre los significados del 11 de septiembre de 1973, fecha que sigue siendo trágica para algunos y heroica para otros. Las manifestaciones callejeras del día 11, violentamente reprimidas por las fuerzas del orden, acaban con un saldo de dos muertos y más de cien heridos. El oficialismo evita tomar una postura clara frente a la conmemoración e insiste en el llamado a una neutral “reconciliación” y una improbable “vuelta a la hoja”.

² La génesis de dicha coalición se ubica a mediados de los años 80, en el contexto de la reorganización de los partidos políticos todavía en recesión bajo el régimen dictatorial. El desarrollo de un fuerte movimiento social de protesta facilita la organización de una alianza entre dirigentes políticos opositores del régimen militar y la participación en el referéndum de 1988, que acabaría alejando a Pinochet del gobierno. En 1989, esta coalición reúne 17 partidos políticos, hoy son cuatro: el Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical Social Demócrata (PRSD) y la Democracia Cristiana (PDC). Se conforma a partir tanto de la absorción, por parte del PS y del PPD, de los diversos grupos de la “izquierda histórica” y de la izquierda cristiana, cuanto por el pasaje de la Alianza humanista-verde a la oposición de izquierda junto al Partido comunista, que nunca ha sido integrado en la Concertación. Los dos primeros gobiernos de la Concertación son presididos por demócratacristianos: Patricio Aylwin (1990-1993) y Eduardo Frei (1994-2000), hijo del omónimo presidente que gobernó antes de Allende. Las siguientes dos legislaturas en el marco de la Concertación son presididas por Ricardo Lagos (2000-2006) del PS y PDC, y Michelle Bachelet (2006-) del PS.

En 2003, Chile es un país aparentemente muy alejado de su pasado dictatorial. Es un país “modelo” desde el punto de vista económico, próximo a firmar tratados de libre comercio con los Estados Unidos, con la Unión Europea y con otros países. El Presidente de la Concertación, Ricardo Lagos, pertenece al Partido Socialista y alcanza una aprobación popular muy elevada. La figura de Pinochet ha atravesado un proceso de declive evidente desatado por los hechos ocurridos en Londres durante 1998. El Comandante en Jefe del Ejército, General Cheyre, había proclamado, algunos meses antes, un inédito “nunca más” relativo a la actuación de los militares el día del golpe y durante la dictadura (sin embargo no deja de participar en la celebración privada organizada en honor de Pinochet). En ocasión del trigésimo aniversario del 11 de septiembre, todos los medios de comunicación inundan al país con una cantidad de información realmente abrumadora e inédita sobre los tiempos de la UP y de la dictadura. La derecha y los pinochetistas siguen con una narración legitimadora del golpe. Resurge Allende como figura central de la conmemoración oficialista (no sin que esto genere mucha polémica dentro de la coalición gobernante), y la palabra clave de todos los actores es “Nunca más”, pero un nunca más que tiene significados a veces ambiguos y poco claros. La conmemoración popular en honor del ex presidente Allende se desarrolla en la calle, fuera del Palacio de La Moneda, sin que hayan accidentes relevantes.

Allende y el proyecto democrático-popular en las memorias

Un primer hito en torno al cual se constituye la memoria nacional contemporánea de la sociedad chilena es el período de la Unidad Popular, última expresión de lo que algunos han denominado el proyecto nacional-popular-democrático (GARRETON, M.A., 2002), que arranca desde la experiencia del Frente Popular y el gobierno de Pedro Aguirre Cerda (1938-1941). El proyecto de la Unidad Popular surgía de una línea de continuidad con los procesos de cambio que Chile vivió desde la década de los años veinte, marcados por la irrupción de las clases medias y de los sectores populares en las dinámicas políticas y económicas. Se trataba de un proceso de progresiva inclusión de los sectores populares, urbanos y rurales, en la vida política y económica del país y que alcanzó su clímax entre mediados de los años 60 y principios de los 70, con la “revolución en libertad”³ del presidente democristiano Eduardo Frei Montalva y con el proyecto de la Unidad Popular. El proyecto político de la Unidad Popular era más radical que el de la Democracia Cristiana, en el sentido de su aspiración abiertamente socialista. Pero en otros aspectos - relativos al sistema institucional y a la idea de democracia - , tenían muchos aspectos en común y esto hace que se pueda evidenciar una línea de “continuidad” en el proceso político chileno entre 1964 y 1973, continuidad que además se inscribe en el desarrollo más amplio del proyecto de inclusión y promoción popular desarrollado a lo largo del siglo XX. Entre 1970 y 1973 este proyecto de largo alcance confluyó en la “via chilena al socialismo”, un intento de sustituir el capitalismo en el respeto de la institucionalidad democrática, dirigido por los partidos de izquierda aglutinados en la coalición llamada Unidad Popular, bajo el mando del presidente Salvador Allende. Más allá de las carencias y los errores en su implementación, se trató de un proyecto efectivamente orientado hacia una gran transformación social, a favor de amplios sectores populares. Desde el punto de vista político el trienio de la Unidad Popular constituye la “*mayor experiencia de participación popular de la sociedad chilena*”, con un carácter marcadamente antioligárquico y antiimperialista (GARCÉS, M., 2004). Retomando el título de un libro sobre ese período publicado en Chile en 2005, el trienio de la Unidad Popular fue un momento en el que los chilenos “*hicieron historia*” (PINTO, J., 2005)

³ El gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), a través del programa de la “revolución en libertad” apuntaba a alcanzar el crecimiento de la economía y la redistribución del ingreso, e institucionalizar la creciente participación política de los sectores sociales hasta entonces excluidos. Para ello postulaba la reorganización de dos áreas económicamente fundamentales: la minería (específicamente el cobre, que era el principal producto de exportación), y la tenencia de la tierra. Es así que bajo Eduardo Frei Montalva se llevó a cabo la llamada *chilenización del cobre* y una reforma agraria importante; además el gobierno quiso incentivar la organización de los sectores bajos de la sociedad, tanto a través del fortalecimiento del sindicalismo cuanto con la creación de instancias urbanas de participación a nivel barrial, tales como los centros de madres y las juntas de vecinos, en el contexto de un programa llamado “Promoción popular”. Paralelamente se inició la puesta en marcha de programas dirigidos a expandir el acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social y a la vivienda.

en el sentido de que “hicieron política”: es decir, las grandes masas se organizaron y movilizaron en el marco de un gobierno por el que se sentían representadas, para llevar a cabo un proyecto para la realización de una sociedad deseada. Debido a la radicalidad de este proyecto, se trató de un período en el que la polarización política y social llegó a ser extrema. Los sectores empresariales, los gremios patronales y, en general, las clases privilegiadas de la sociedad chilena, sintieron que sus intereses y su seguridad estaban siendo puestos en riesgo más que nunca, por la puesta en marcha de unas reformas que tendían a subvertir los esquemas de la convivencia social y política del orden existente hasta entonces. La oposición de las oligarquías, reunidas en los partidos de la derecha nacional se conjugó con la voluntad del gobierno norteamericano, entonces presidido por Richard Nixon, de terminar con Allende incluso antes que asumiera, y con el progresivo desplazamiento hacia la derecha de la postura mayoritaria de la DC.

El final cruento de la Unidad Popular fue entonces también el final de un proyecto de democratización profunda de la sociedad chilena que tenía una amplia trayectoria en la historia del siglo XX chileno, y representó el retorno a un sistema dominado económica, social y políticamente por las clases que tradicionalmente habían conducido los destinos del país. Bajo esta perspectiva el golpe de Estado puede ser interpretado como un intento exitoso de restablecimiento del orden político oligárquico y la exclusión de las clases populares de los ámbitos del poder, a través de una nueva “revolución” de carácter neoliberal, que todavía marca el carácter de la sociedad chilena, con que las élites modificaron sus estrategias políticas y económicas para mantenerse en el poder en un nuevo contexto nacional e internacional. A partir de ahí que el recuerdo de lo que fue y significó la experiencia de la Unidad Popular ha sido, y sigue siendo, un ámbito importante de conflicto de las memorias que refleja y evidencia también la ausencia de un proyecto democrático compartido para el Chile futuro: se trataba de un proyecto político y social de amplio respiro que fue abortado violentamente y que ha generado - y todavía genera - diferentes selecciones y aprendizajes en los distintos actores de la política actual. Además hay que recordar que la muerte trágica y heroica del presidente Allende en el Palacio de La Moneda, como acto final de consecuencia respecto a su programa de gobierno, hace que su figura sea un paso ineludible en las narraciones en torno al 11 de septiembre. La presencia en la memoria del presidente muerto permanece como acontecimiento que, bien fomentando la creación de distintos “mitos” o evidenciando la existencia de ciertos “tabúes”, obliga todos los actores que recuerdan a pronunciarse sobre lo que fue Allende y el proyecto por el que murió.

Las voces de los “vencedores” del golpe, es decir de los que en 1973 se sentían amenazados por el gobierno de Allende y auspiciaban una intervención militar – en particular los grupos empresariales conservadores y la oposición de derecha – se han expresado tradicionalmente a través de las páginas de *El Mercurio*, el periódico más antiguo de Chile, de propiedad de la familia Edwards – una de las familias más potentes del país. Una revisión de los discursos de “análisis histórico” aparecidos en ese diario en ocasión de los tres aniversarios de las décadas del 11 de septiembre permite establecer una sustancial continuidad, a lo largo de las tres décadas, en la evaluación del período allendista. El proyecto de la Unidad Popular aparece aquí como el peligroso intento de los grupos ultraizquierdistas de transformar Chile en una segunda Cuba, disfrazándose detrás de un instrumental respeto por las instituciones democráticas y a través del ingenuo apoyo de la Democracia Cristiana. *El Mercurio* publica una y otra vez el texto del Acuerdo del Congreso de Chile, del 22 de agosto de 1973 - que declaraba la inconstitucionalidad de las actuaciones del gobierno de Allende - para reafirmar la legitimidad de la intervención de las Fuerzas Armadas como garantes del orden democrático. El caos, la anarquía, la polarización política y la crisis económicas son las notas de fondo que dibujan el perfil del trienio de la Unidad Popular en las páginas de *El Mercurio* hasta el 2003. El fantasma de la violencia política durante ese trienio, es reeditado tanto en 1983 cuanto en 1993 para condenar las protestas callejeras en ocasión de los aniversarios como evidencia de las “costumbres antidemocráticas” heredadas por sectores de la sociedad desde los tiempos de la Unidad Popular. Según esta visión, el programa de Allende era inviable en el marco de la democracia y su desarrollo ulterior hubiera conducido inevitablemente a la dictadura marxista, o bien a una guerra civil. La figura del presidente Allende oscila entre la imagen del

revolucionario falsamente demócrata, amigo de Fidel Castro y admirador de la Unión Soviética, y la imagen del dirigente incapaz de contener las tendencias extremistas que, en la sociedad chilena y dentro de su propia coalición, preconizaban la vía armada para la realización de la dictadura del proletariado.

A partir de 1983, la oposición popular y política al régimen vive una etapa de fermento y reorganización a través de las protestas callejeras, todas ellas brutalmente reprimidas, y de la constitución de bloques políticos (como la Alianza Democrática, AD) que empiezan a dialogar con el régimen con el objetivo de negociar la renuncia de Pinochet y la vuelta a un sistema democrático antes de los plazos fijados por la Constitución de 1980. Los opositores al régimen se unen en el proyecto compartido de la recuperación de la democracia y la figura de Allende es presente como el símbolo del presidente mártir de la democracia, que legitima la lucha de los que buscan una salida inmediata del dictador y la vuelta a un sistema democrático que incluya los valores de justicia social y respeto de los derechos humanos. Entre los pocos medios que los sectores de la oposición tienen a su alcance para proclamar su versión de los hechos están algunas revistas que se ocupan de temas políticos en medio de continuas amenazas o bien gracias al amparo de la Iglesia Católica. Es el caso de la revista juseuita *Mensaje*, y de *Análisis*, revista patrocinada por el Académia de Humanismo Cristiano. En estas páginas, y pocas más, en ocasión del décimo aniversario del golpe se publican ensayos en los que intelectuales de izquierda reflexionan sobre la experiencia de la Unidad Popular, a veces mistificando la figura de Allende y el recuerdo del trienio de la “vía chilena al socialismo”, pero también surgen análisis críticos sobre los errores cometidos y las responsabilidades internas al movimiento. A partir de estos momentos ya empieza a manifestarse una escisión entre dos memorias distintas de la experiencia allendista en el seno de la oposición democrática, y estas memorias llevan los gérmenes de dos proyectos distintos de las democracias que se quieren construir más allá de la lucha contra la dictadura. Para una parte de la oposición - en particular para los dirigentes políticos de los partidos de izquierda y de la Democracia Cristiana empeñados en la dinámica del diálogo con el régimen-, la gran enseñanza que hay que sacar de la experiencia allendista es que no puede haber transformaciones sociales en el marco democrático si no se cuenta con la mayoría política, si no se llevan a cabo gestos y acciones de gobierno para que se establezca un “consenso” mayoritario en torno a los proyectos políticos. La otra enseñanza dejada por la UP, cuyo fracaso fue en buena medida determinado por la decisión de la Democracia Cristiana de retirar su apoyo a la coalición gobernante, es que en Chile dicha mayoría sólo se puede lograr a través de una coalición entre los partidos de centro y los de izquierda. Como hace notar Jorge Arrate, la memoria de importantes sectores de la clase política en esta materia confluyó, en 1988, en la gestación de la Concertación de Partidos por la Democracia (ARRATE, J., 2003), coalición que ha llevado a cabo el proceso de transición y que ha elegido cuatro gobiernos desde el término de la dictadura. La memoria del fracaso del experimento allendista es así fundamental en la génesis de la actual coalición de gobierno y es además una referencia importante para el proyecto con el que esta estrenó su accionar: la llamada “política de los consensos” promovida especialmente por su primer presidente Patricio Aylwin. De hecho, en las pocas páginas del diario *La Nación*, instrumento de expresión del gobierno, dedicadas al recuerdo de la UP en el marco del aniversario de los veinte años del golpe de Estado (1993), emerge la obsesión por recordar la ingobernabilidad derivada de la polarización política y del enfrentamiento ideológico que marcó el trienio allendista. La voluntad de remarcar este aspecto como una de las causas principales de la crisis de ese proyecto es funcional a la legitimación de una política de pequeños cambios y búsqueda continua acuerdos. El miedo a los disensos que domina la etapa del gobierno de Aylwin, es demostrado, entre otras cosas por el hecho de que, bajo su gobierno, varias revistas de crítica política que habían jugado un rol importante en la oposición a la dictadura tuvieron que clausurar (emblemático es el caso de la Revista *Análisis*) y quedaron muy reducidos los espacios para las críticas procedentes de los sectores de la izquierda extraparlamentaria. El vigésimo aniversario del golpe de Estado se torna así para el Gobierno - y también para la Iglesia Católica y para los sectores derechistas-, en una ocasión para reiterar el invite a la reconciliación y al reencuentro entre los chilenos. Se trata de una reconciliación que en los años venideros se demostrará imposible, también porque se fundamenta en un llamado dirigido a la buena voluntad de los distintos sectores, y no se basa en el esclarecimiento de las responsabilidades mutuas ni en su sanción moral y legal por parte del Estado. Por otra parte, en

1993, el fracaso del proyecto de la Unidad Popular asume las características del “desenlace ineludible de una tragedia griega”⁴, como si el golpe de Estado no hubiese sido fruto de una deliberada conspiración de las Fuerzas Armadas, de ciertos sectores de la derecha y de la misma Democracia Cristiana y del gobierno de los Estados Unidos, sino más bien el mismo proyecto allendista contenía ya en sí las raíces de su propia destrucción.

En las conmemoraciones oficialistas del 11 de septiembre de 2003, resurge Allende como figura central: se dedica a su nombre la sala del Palacio que corresponde al lugar dónde se suicidó y Ricardo Lagos, segundo presidente socialista después de Allende, protagoniza un acto pensado para tener un gran impacto mediático: la reapertura de la puerta¹³ por la que los presidentes republicanos solían acceder al Palacio de La Moneda y por la que fueron sacados los restos de Allende en el día del golpe de Estado. Sin embargo, los homenajes para el ex-mandatario, que no dejan de provocar polémicas en las filas demócratacristianas de la coalición gobernante y en los partidos de derecha, se refieren a un Allende símbolo de las virtudes republicanas y parecen poner entre paréntesis el contenido revolucionario del programa de su gobierno. La reapertura de la puerta de Morandé 80 es invocada por el presidente “*para que vuelvan a entrar las brisas de libertad que han hecho grande a nuestra patria*”⁵. Allende es aquí el símbolo de la consecuencia democrática, pero el contenido de su programa democrático popular es puesto entre paréntesis: la voluntad de hacer de Chile un país más igualitario y una democracia más participada se quedan como notas al pie en un momento en el que las actuaciones del gobierno reafirman la adhesión a un modelo de desarrollo marcadamente neo-liberal nunca cuestionado que es el marco que define el proyecto del presidente Lagos de hacer de Chile un país “desarrollado”. Con respecto al desemboco trágico de la experiencia de la Unidad Popular en el golpe de Estado y los largos años de la dictadura pinochetista, el 2003 es el año en el que se produce un fenómeno de catársis en el que muchos actores de la política de la UP, el Ejército y los distintos sectores de la política parlamentaria (con la notable excepción de la derecha) reconocen y lamentan las respectivas responsabilidades en los trágicos acontecimientos que rodean el quiebre de la democracia y pronuncian un coral y ambiguo “Nunca más”: nunca más a las violaciones de los derechos humanos, nunca más a la intervención del Ejército como sujeto deliberativo en las decisiones políticas, nunca más a la intolerancia de las ideologías, nunca más al quiebre de la convivencia democrática. Se trata de un hecho seguramente importante para la restauración de la comunidad nacional, sin embargo cabe destacar un aspecto: el Nunca más al quiebre de la democracia, desligado de una asunción de la herencia política del proyecto democrático popular derrocado por el condenado golpe militar puede llevar implícito también un “nunca más” a los proyectos políticos de cambio radical, nunca más a la política como confrontación de distintas visiones sobre el futuro de la Nación. Allí tal vez se puede buscar una raíz de aquella insólita convergencia de proyectos entre izquierda y derecha que subraya el texto de Vargas Llosa que mencionábamos al principio.

Los grupos que, desde un principio han asumido – aunque con cierta dosis de mitología - la herencia del proyecto allendista y han conmemorado en 11 de septiembre también como fecha en la que se ha destruido el sueño de una sociedad más igualitaria e incluyente, pertenecen a unos sectores de la izquierda que, a partir de los comienzos de la transición a la democracia, han quedado excluidos del juego político. Entre ellos está el Partido Comunista, pero también todos los actores que constituyen el variado conjunto de los movimientos sociales de sensibilidad izquierdista que han confluído, a lo largo de las últimas décadas, en distintas agrupaciones políticas como el Movimiento de Izquierda Democrático Allendista (MIDA), durante el gobierno de Aylwin, o la coalición Juntos Podemos Más⁶,

⁴ La expresión “tragedia griega” que una y otra vez es usada para estigmatizar la experiencia de la Unidad Popular viene de una carta pública que, días antes del 11 de septiembre de 1973, el ex candidato a la presidencia de la Democracia Cristiana, Radomiro Tomic, le había enviado a l recién renunciado Comandante en Jefe del Ejército Carlos Prats, que contenía esta frase: “*Como en las tragedias del teatro griego clásico, todos saben lo que va a ocurrir, todos desean que no ocurra, pero cada cual hace precisamente lo necesario para que suceda la desgracia que pretende evitar*”.

⁵ *La Nación*, “Morandé 80: Puerta de la democracia”, 14 septiembre 2003. P.12

⁶ Juntos Podemos Más es un pacto político formado por organizaciones sociales y políticas de izquierda. Está integrado por más de 50 organizaciones sociales y partidos políticos. Los partidos legalmente constituidos y los miembros más importantes integrantes del pacto

nacida en 2003, que abarcan un amplio espectro de movimientos de la sociedad civil y representan proyectos de democracia y sociedad que son alternativos al “proyecto único” de los partidos de las grandes coaliciones de izquierda y derecha. Significativamente, estos sectores de la política chilena tienen muy poco acceso a los medios de comunicación de masas, sin embargo un análisis de las páginas del desaparecido diario *La Epoca* en 1993, o de *El Siglo* (publicación del Partido Comunista), o de la revista *Punto Final* (revista izquierdista fundada en el '65 e históricamente vinculada con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria – MIR), en ocasión de los aniversarios del golpe permite notar una distinta sensibilidad frente al recuerdo de la figura de Allende y de su gobierno. En estas publicaciones, como también en las protestas callejeras y en las manifestaciones culturales, la figura de Allende está en el centro de las reivindicaciones por la democracia (en 1983), y por los derechos humanos y sociales. El esfuerzo constante es el de actualizar el mensaje de Allende y la experiencia de la Unidad Popular, volviendo a publicar sus discursos, su programa de gobierno para recuperar, en otros contextos, los contenidos de la democracia y del modelo de desarrollo del proyecto nacional-popular allendista. Se trata de grupos con identidades muy variadas pero que convergen en su crítica radical a las políticas de los gobiernos de la Concertación, que son vistos como gestores de un modelo de democracia y de desarrollo heredado del pinochetismo, y en la búsqueda de modelos alternativos para el futuro de la sociedad chilena. Del allendismo recuperan la dimensión participativa e incluyente de los sectores marginados, la centralidad del Estado como garante de los derechos sociales, económicos y culturales, la vocación latinoamericanista y antiimperialista. El golpe de Estado es interpretado según las categorías de la traición militar, de la reacción oligárquica y de la guerra fría, criticándose la narración oficial de una supuesta inviabilidad intrínseca del programa de Allende. Durante las celebraciones del aniversario del golpe en 2003, mientras el gobierno realizaba sus actos en el interior del Palacio de La Moneda, este pueblo que se considera heredero del proyecto allendista rendía homenaje al ex mandatario en otro acto en la Plaza de la Constitución adyacente al Palacio. Ambas conmemoraciones estaban dedicadas a la misma persona, pero los contenidos y las proyecciones de esas memorias parecen pertenecer casi a dos países distintos.

Esta izquierda extraparlamentaria, que incluye movimientos sociales de muchos tipos que reivindican su identidad de sujetos políticos, no tiene acceso a la esfera parlamentaria e institucional debido sobre todo al sistema electoral binominal mayoritario, establecido por Pinochet en la Constitución de 1980. Los efectos de dicho mecanismo electoral son muy importantes para la evolución del sistema de los partidos puesto que garantiza la estabilidad en torno a dos grandes polos electorales: en el momento de su formulación, la idea era de evitar la aparición de dinámicas centrífugas dentro del sistema político, y del fortalecimiento de una tercera fuerza electoral, es decir de la izquierda⁷. La mantención de dicho sistema es una de las formas institucionales de la tesis de la polarización política como desencadenante de la crisis de la Unidad Popular y del rol estratégico de los partidos de centro en la consolidación de la democracia: se trata de uno de los llamados “enclaves autoritarios” creado en el marco de la lógica de la legitimación del poder autoritario y de la reorganización institucional bajo el régimen de Pinochet⁸.

son el Partido Comunista de Chile y el Partido Humanista. Otros partidos sin constitución legal integrantes del pacto son: Izquierda Cristiana, MIR, Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, Izquierda Socialista, Movimiento por el Socialismo (MPS), Partido Alternativa Socialista (PAS), estos últimos 3 agrupados en el Bloque por el Socialismo (BS), Identidad Rodriguista (IR), Movimiento Fuerza Ciudadana (FC), Partido Comunista Chileno Acción Proletaria (PC-AP), Cambio Democrático, Partido Radical de Chile (PRCh- Grupo disidente del Radicalismo en el gobierno), revolución Democratizadora (RD), Generación 80 (G-80), partido de los Trabajadores (PT) y las Juventudes Comunistas de Chile. Hay además otras organizaciones sindicales, culturales, ecologistas, de diversidad sexual etc. participantes en el pacto.

⁷ El sistema electoral binominal mayoritario implica que la coalición mayoritaria, si no obtiene al menos el doble de los votos de la segunda fuerza electoral, solo puede contar con un escaño parlamentario cada dos, en cada distrito electoral. La segunda fuerza electoral puede entonces controlar la mitad de los escaños si obtiene por lo menos el 33,4% de los votos, lo cual corresponde históricamente a los votos de la derecha. Esta se beneficia ampliamente de este sistema, puesto que los partidos de la izquierda extra concertacionista no pueden acceder a la representación parlamentaria. La Concertación tiende así a capitalizar, sin que haya una competencia real, el voto de la izquierda en las elecciones parlamentarias. La izquierda extraparlamentaria está, por otra parte, forzada a luchar en contra de su propia desaparición puesta que la ley sobre los partidos políticos anula la existencia legal de un partido que no obtenga por lo menos el 5% de los votos en las elecciones nacionales, o no cuente con por lo menos tres diputados elegidos.

⁸ Para una reflexión sobre la génesis del sistema electoral binominal mayoritario: PASTOR, Daniel, “The origins of the Chilean binominal election system”, en *Revista de Ciencia Política*, Santiago, 2004, 24 (1), p.38-57.

En el año 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, se han aprobado unas reformas constitucionales muy importantes tendientes a regularizar el papel de la Fuerzas Armadas dentro de las instituciones políticas chilenas. Sin embargo, el cambio del sistema electoral queda como tarea pendiente para la instauración de un sistema político más democrático, puesto que excluye del juego político una parte importante de la izquierda chilena, que es portavoz de una memoria distinta y de un distinto proyecto para el futuro del país. Se trata de permitir la entrada en la política chilena de aquella parte de la sociedad que, en el anhelo de construir una democracia más participativa y una sociedad más justa, mira a su historia como un capítulo pendiente y lo hace no por revivir odios, sino porque cree que para terminar con los conflictos sociales también hay que asumir la herencia del pasado, en el sentido de recuperar, en otro contexto y con otros parámetros, lo mismo por lo cual Allende y muchos chilenos dieron su vida.

Conclusión

Chile es hoy un país políticamente estable en el marco de una institucionalidad democrática y económicamente exitoso en la senda de un proyecto de desarrollo de tipo neo-liberal. Sin embargo la sociedad chilena es una sociedad clasista, marcadamente desigual y que tiende a permanecer al margen de la participación política, de ahí que se puede hablar de una democracia “de baja intensidad” que no se sustenta en una sociedad de ciudadanos políticamente activos sino en el juego político de las cumbres partidistas. La transición chilena a la democracia tiene algunas carencias evidentes que derivan de las imperfecciones y perversiones heredadas de la institucionalidad y estilos predominantes en el régimen autoritario y que se han consolidado en la transición misma, generando un sistema que tiende a privilegiar la gobernabilidad por encima de la representatividad democrática y de la participación política de las bases. El espacio para la opción ciudadana queda reducido y el conjunto de la clase política se limita a administrar, sin cuestionarlo fundamentalmente, un modelo de democracia y desarrollo heredado, abandonando así la función importantísima de la deliberación y decisión política en torno a proyectos para construir una mejor sociedad. El papel de la memoria colectiva en los procesos que determinan este tipo de democracia “*desencantada*” es fundamental, puesto que la actual ausencia de un debate abierto en torno al proyecto político deseado al interior de la comunidad nacional guarda una relación estrecha con la negación, por parte de la clase política, de la herencia histórica del proyecto democrático popular que, desarrollándose a lo largos del siglo XX, llegó a su punto máximo durante el gobierno de Salvador Allende y quedó truncado por el golpe de Estado de 1973, hito histórico que marca la identidad de la sociedad chilena. No es casual que el 11 de septiembre sea un día mucho más significativo en la memoria colectiva de los chilenos, que el 5 de octubre, fecha en la que la Concertación conmemora la victoria del “No” a Pinochet en el plebiscito de 1988 y el comienzo de la transición a la democracia. La democracia actual no es asumida como pertenencia propia por parte de toda la sociedad, sino que es rechazada por aquella parte del tejido social - que significativamente incluye a la mayoría de los movimientos sociales y populares - que busca los cauces para una reactualización posible del proyecto político que quedó pendiente en 1973. La coyuntura actual, con la dirigencia de una clase política progresista en Chile y la emergencia de unas nuevas izquierdas en varios países latinoamericanos, puede ser aprovechada para incorporar estas memorias silenciadas en el devenir político, a través del debate sincero sobre los acontecimientos históricos del pasado reciente, pero también a través de la reforma de un sistema electoral que condena a la exclusión parlamentaria a los grupos y movimientos de izquierda que se sienten herederos del proyecto democrático-popular. No es posible revivir el pasado, ni se puede reeditar una experiencia que pertenece a otro contexto histórico, pero si se puede buscar una recomposición ética de la sociedad entorno a su pasado, para que se abran posibilidades de discusión y cambio del actual modelo de desarrollo y de democracia.

Referencias bibliográficas:

- ARRATE, Jorge. *La memoria de la izquierda chilena*, vol II (1970-200). Santiago: Ediciones B, 2003.
- CORREA, Sofía; FIGUEROA, Consuelo; JOCELYN-HOLT, Alfredo; ROLLE, Claudio; VICUÑA, GARCÉS, Mario, “Los movimientos sociales populares en el siglo XX: balance y perspectivas”, en *Política*, N.43, Primavera 2004.
- GARRETÓN, M.A. “Memoria y proyecto de país”, en *Revista de Ciencia Política*. 2003, Volumen XXIII, n. 2, pp.215-230.
- HUNEEUS, Carlos. *Chile: Un país dividido. La actualidad del pasado*. Santiago: Catalonia, 2003.
- JELIN, Elizabeth (comp.), *Las conmemoraciones: las disputas en las fechas (in)felices*, Madrid, Siglo XXI, 2002.
- JELIN, Elizabeth. *Los trabajos de la memoria*. Madrid: Siglo XXI, 2001.
- Manuel. *Historia del siglo XX chileno*. Santiago: Editorial Sudamericana, 2001.
- MOULIAN, Tomás (coord.), *Construir el futuro (Vol. I). Aproximaciones a proyectos de país*. Santiago: LOM, 2002.
- PINTO VALLEJOS, J. (coord.), *Quando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular*, Santiago, LOM, 2005.
- STERNE, Steve J., “De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia el recordar y el olvidar como proceso histórico (Chile 1973-1998)”, en GARCÉS, Mario (comp.), *Memoria para un nuevo siglo. Chile: Miradas a la segunda mitad del siglo XX*. Santiago: LOM, 2000.